



143

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 28 JUL 2020

AUTO INTERLOCUTORIO No. _____

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76111-33-33-001-2015-00487-01
DEMANDANTE:	JOHNNATAN STEVEN SALGUERO GARCÍA
DEMANDADO:	NACIÓN- MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO -INEPTA DEMANDA - REVOCAR

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resolverá el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 1481 del 3 de diciembre de 2019, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de Buga, mediante el cual declaró probada la excepción de inepta demanda.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, a través de apoderada judicial, el señor JOHNNATAN STEVEN SALGUERO GARCÍA demando a la NACIÓN-MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL y solicitó¹ la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Fallo de primera instancia de fecha 15 de octubre de 2014, emanado del Comando de Batallón de Combate Terrestre nro. 92 y por medio del cual se sancionó al demandante con suspensión e inhabilidad especial de sesenta (60) días, sin derecho a remuneración.
- Fallo de segunda instancia de fecha 13 de marzo de 2015 emanado de la Brigada Móvil nro. 14 de Guadalajara de Buga y por medio del cual se confirmó el fallo de primera instancia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la entidad: 1) a reintegrar al demandante bajo las mismas condiciones en se encontraba al momento de su retiro, realizando los registros pertinentes en el sistema SIJUR en su hoja de vida, dejando sin efecto la sanción impuesta, debiendo informar a la Procuraduría Provincial de Valle del Cauca los efectos de lo acordado, evitando que siga figurando el correctivo disciplinario como antecedente; determinándose que no hubo solución de continuidad en cuanto hace referencia a la antigüedad, mano y jerarquía de acuerdo a su grado dentro de la institución; 2) Indemnizar al demandante incluyendo los salarios y emolumentos prestaciones sociales pagados incompletamente desde el 15 de abril de 2013 y los dejados de percibir sin solución de continuidad durante todo el tiempo que estuvo cesante, es decir desde el 15 de diciembre de 2013 hasta la fecha del cumplimiento; 3) Reconocer al demandante los perjuicios morales causados equivalentes a 50 smlmv; 4) el reconocimiento de intereses moratorios; 5) costas procesales.

¹ Ver folios 6 y 7

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado
Asunto

: 2015-00487-01
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: JOHNNATAN STEVEN SALGUERO GARCÍA
: NACIÓN-MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL
: APELACION DE AUTO

2

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 1481 proferido en audiencia inicial del 3 de diciembre de 2019², el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito de Guadalajara de Buga declaró probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda. Sustentó su decisión bajo los siguientes argumentos:

Como quiera que de la exposición fáctica de la demanda se aprecia el conocimiento previo de la parte demandante, acerca de la decisión de revocar la actuación cuya nulidad se pretende, sin que se hubiese iniciado alguna actuación posterior, reclamándole a la autoridad el reconocimiento de las acreencias laborales causadas como consecuencia de la sanción revocada, se tiene que por el administrado no se le permitió al Ejército Nacional, efectuar pronunciamiento alguno.

En consecuencia, al considerar que no resultaba procedente emitir un pronunciamiento de fondo, habida cuenta que la actuación sometida a control judicial ya fue suprimida del mundo jurídico en sede administrativa, se accedió a declarar probada la excepción de inepta demanda, y en consecuencia dio por terminado el proceso.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostuvo la parte recurrente, en síntesis, que los argumentos axiológicos del Despacho no dan lugar a declarar esta excepción teniendo en cuenta que los actos de ejecución son simplemente actos de ejecución y no son demandables. La revocatoria directa no es un acto administrativo propiamente dicho.

Ahora bien, se indica que en ningún momento se presentó derecho de petición para restablecer los derechos del actor y es precisamente el objeto y principal petición de esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho al solicitar la nulidad del fallo de primera y segunda instancia que exista reparación integral del daño³.

CONSIDERACIONES:

5.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Se debe confirmar o revocar la decisión del juez de primera instancia que declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda, por no existir actos administrativos que permitan ejercer control de legalidad?

5.2. TESIS

Se revocará la providencia apelada, toda vez que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado⁴, los actos administrativos que hayan producido efectos jurídicos son susceptibles de control de legalidad, aunque hayan sido retirados del ordenamiento jurídico.

² Ver folios 137 y 138

³ CD obrante a folio 134

⁴ Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia de unificación del 24 de mayo de 2018, Consejera Ponente ROCIO ARAUJO OÑATE, radicación 47001-23-33-000-2017-00191-02.



144

5.3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL CASO CONCRETO:

• DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 180 del CPACA en la audiencia inicial, se resolverán las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

El artículo 100 de la Ley 1564 de 2012⁵, enlistó las excepciones previas dentro de las cuales en su numeral 5 se encuentra la denominada "*Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones*" norma a la cual se acude por remisión del artículo 306 del CPACA.

La finalidad de las excepciones previas, es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso *ab initio*, ya que no sería posible, ante su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia.⁶

Conforme con lo expuesto es claro que, en la audiencia inicial al juez le corresponde decidir sobre las excepciones que tengan el carácter de previas las cuales están mencionadas en el artículo 100⁷ del CGP, esto es, aquellas que se encaminen a atacar la forma del proceso, por existir alguna inconsistencia de tipo procedimental en la manera como fue presentada la demanda, sin enervar la pretensión, pero con la posibilidad de dar lugar a la terminación o suspensión de aquel, motivo por el cual deben ser resueltas en la primera audiencia, bien sea las propuestas por el extremo pasivo o de oficio por el juez.

Adicional a estas, también podrán resolverse, como lo señala el citado artículo 180 del CPACA, las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, que son de naturaleza mixta, por lo que a pesar de ser algunas estrictamente perentorias o de fondo, por estar orientadas a atacar la pretensión, se les da el trámite de previas y en caso de que prosperen tienen la virtud de terminar el proceso.

• DE LA EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA:

Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Segunda señaló que con anterioridad se ha hecho alusión a esta figura como si se tratara de una excepción previa o causal de rechazo de la demanda y en últimas, como sustento de decisiones inhibitorias, lo cual constituye una imprecisión⁸.

⁵ Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

⁶ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN - Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil quince (2015) - Radicación número: Acto25000-23-25-000-2004-00247-01(1886-12) demandante: JOSE AGUSTÍN MORA TORRES - Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -UAEAC-, y COMO LITISCONSORTE NECESARIO AVIANCA S.A.

⁷ El Código General del Proceso, en el artículo 100, dispone: «EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:

1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada».

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 21 de abril de 2016, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Rad. 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).



Ello, toda vez que sólo es viable proponer y declarar, de parte o de oficio, próspera la excepción previa de "ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales" o "por la indebida acumulación de pretensiones" y; en relación con otras situaciones, se debe acudir a las demás excepciones previas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, sin que haya vocación para realizar una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

Así mismo, se recalcó que al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una "ineptitud sustantiva de la demanda", en lugar de acudir a esa denominación, se deben utilizar las herramientas que los estatutos procesales prevén para tal efecto, tal como se analizó extensamente en el auto en cita, esto es, aquellos mecanismos de saneamiento como por ejemplo, ordenar corregir la demanda o dejar sin efecto el auto admisorio para proceder al rechazo de la misma en atención a la causal legalmente prescrita para el efecto.

Lo anterior fue reiterado en reciente providencia del 25 de abril de 2019, en la cual se recordó que es viable proponer y declarar la excepción previa de "ineptitud de la demanda" cuando se trata de la falta de requisitos formales de la demanda e indebida acumulación de pretensiones⁹.

• REVOCATORIA DIRECTA

Respecto a esta figura la Ley 1437 de 2011, en su artículo 93 establece que:

"Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. *Cuando sean manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.*
2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
3. *Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."*

Por su parte el Consejo de Estado¹⁰ ha indicado las siguientes pautas: 1) No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado recursos de la vía gubernativa. Lo anterior significa que existe incompatibilidad entre la procedencia de la revocatoria con el agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto la administración ya tuvo oportunidad de enmendar los posibles yerros de su actuación mediante los recursos. 2) Dichas normas prevén que la revocatoria podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siempre que en este caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda; 3) En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos, bien sean de contenido general o particular y concreto deberán resolverse dentro del término de 3 meses siguientes a la fecha de su presentación.

• DE LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA DEL ACTO DEMANDADO

Frente a la posibilidad de que sea estudiada la legalidad de un acto administrativo frente al cual ha operado la pérdida de ejecutoria, el Consejo de Estado, a través de sentencia de unificación, aclaró que las consecuencias procesales de dicha situación dependen de si el acto demandado alcanzó o no a producir efectos jurídicos.

⁹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 25 de abril de 2019, Consejero Ponente: WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ. Rad: 25000-23-42-000-2016-03390-01(4082-17)

¹⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subsección A. Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. Bogotá, D.C., cinco (05) de junio de dos mil catorce (2014). Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00093-00(0322-11). Actor: JOSE OLEGARIO GOMEZ DURAN. Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y MUNICIPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA.

En ese orden de ideas, si el acto demandado no produjo efectos jurídicos y no se encuentra vigente, "...le corresponde al magistrado que conduzca el proceso, determinar su ocurrencia con el fin de terminarlo en su etapa inicial siguiendo las reglas de las excepciones previas previstas en el artículo 180.6 incisos 3 y 4 y no esperar hasta la sentencia para inhibirse de conocer el fondo del asunto en detrimento del derecho que tienen los ciudadanos para que la administración de justicia les garantice que los mecanismos judiciales sean eficaces¹¹".

Sin embargo, en caso de que el acto demandado haya producido efectos jurídicos, "...el juez contencioso administrativo aún en el evento en que haya sido retirado del ordenamiento jurídico¹², mantiene su competencia para conocer de su legalidad porque, su exclusión jurídica impide que el acto se aplique hacia el futuro, empero, no desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió de sustento para producir los efectos jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia". (Negrita y Subrayas fuera del texto)¹³.

Así las cosas, aunque haya operado el decaimiento del acto demandado, el juez está en la obligación de efectuar el control de legalidad del mismo cuando éste haya producido efectos jurídicos y, por lo tanto, no podrá declararse la ineptitud de la demanda.

• MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Considera esta Corporación importante manifestar que la acción pertinente para alegar un perjuicio que se causa por la expedición de un acto administrativos, es la de nulidad y restablecimiento del derecho la cual se encuentra regulada en el artículo 138 del CPACA, que establece:

"Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causas establecidas en el inciso segundo del artículo anterior."

Las causas que dispone dicha disposición se encuentran en el inciso segundo del artículo 137 que rezan:

"Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió."

Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado¹⁴ ha argumentado:

"El Código Contencioso Administrativo consagra como indemnizatorias tanto las acciones de reparación directa como las de nulidad y restablecimiento del derecho, aunque cada una con unos fines, móviles y motivos diferentes, en la medida en que la actuación generadora del daño cuya reparación se demanda es en la primera la acción, omisión, operación administrativa u ocupación de inmueble, mientras que en la segunda el daño proviene directamente del acto administrativo, siendo necesario para predicarse la antijuridicidad de aquel, la nulidad del acto. Con la acción de reparación directa en los términos del artículo 86 del C. C. Administrativo se busca la declaratoria de responsabilidad del Estado, cuando con un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos

¹¹ Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia de unificación del 24 de mayo de 2018, Consejera Ponente ROCIO ARAUJO OÑATE, radicación 47001-23-33-000-2017-00191-02.

¹² Como en el caso en concreto, que el acto demandado fue revocado por el Concejo Distrital de Santa Marta.

¹³ Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia de unificación del 24 de mayo de 2018, Consejera Ponente ROCIO ARAUJO OÑATE, radicación 47001-23-33-000-2017-00191-02.

¹⁴ Sentencia del 19 de julio de 2006, Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio.



públicos o cualquier otra causa se ocasione un daño antijurídico que se le pueda imputar y, por ende, tiene el deber jurídico de indemnizar. Jurisprudencialmente se ha establecido, además, como la acción idónea para demandar la indemnización por el daño causado por el acto legal, cuando este rompe el principio de la igualdad frente a las cargas públicas. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente cuando el daño proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es menester que el juez declare su nulidad, porque solo entonces el daño causado por éste será antijurídico y comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que siempre que exista un acto administrativo con el cual se afirma haber causado un perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, ésta será la acción correcta." (Subrayado y negrilla fuera del texto).

En providencia del 21 de noviembre de 2018, la Sección Tercera del Consejo de Estado, preciso¹⁵:

"(...) si la causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto administrativo particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse la presunción de ilegalidad que lo caracteriza.

(...)

7.4. Medio de control procedente

Pues bien, según lo indicado, la parte demandante pretende que se le indemnicen los perjuicios causados con la supresión del cargo que el señor Fredis Manuel Lagares Vergara ocupaba en la Personería Distrital de Barranquilla, por lo que el origen del daño es un acto particular que se considera contrario al ordenamiento y su finalidad, además del restablecimiento del orden jurídico, es la restitución de un derecho subjetivo y concreto a través del restablecimiento in natura y/o la indemnización de los daños causados.

Por lo anterior, tal como lo concluyó el a quo, la demanda debió tramitarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque es este el idóneo para que "[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica [pueda] pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular [...], se le restablezca el derecho y [...] se le repare el daño".

Así las cosas, se considera ajustada la decisión del Tribunal de impartir a la demanda el trámite que correspondía, toda vez que tal determinación obedeció al deber del juez de "analizar e interpretar [el texto de la demanda] de ser necesario, con el fin de desentrañar la voluntad de los demandantes" y, en concreto, a la carga consagrada en el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, la de adecuar las pretensiones al medio de control procedente pese a que la parte demandante haya invocado una vía procesal diferente".

6. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328¹⁶ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306¹⁷ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

¹⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B. Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (E). Auto del 21 de noviembre de 2018. Radicación número: 08001-23-33-000-2016-0889-01(62117)

¹⁶ ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

¹⁷ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



146

El Despacho considera, que contrario a lo manifestado por la *a quo*, en el presente caso el perjuicio alegado se genera a raíz de un acto administrativo que creo, modifiqué o extinguió el derecho del demandante y que por tal razón podía ser demandado bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así entonces, en el caso bajo estudio, las pretensiones alegadas nacen a raíz de una decisión que la administración tomó como consecuencia de un proceso sancionatorio tramitado por el Ejército Nacional en los siguientes términos:

- Fallo de primera instancia IVN Disciplinaria nro. 002-2013 del 15 de octubre de 2014¹⁸ proferido por el Batallón de Combate Terrestre nro. 92 MY Andrés Alejandro Orozco Castro, a través del cual se responsabilizó disciplinariamente al Soldado Profesional Retirado Salguero García Johnnatan Steven Salguero García, imponiéndole como sanción, la suspensión por el término de sesenta (60) días sin derecho a remuneración e inhabilidad especial por el término de sesenta (60) días, término que en ningún caso se computará como tiempo de servicio, e inhabilidad especial por el mismo término. Providencia notificada el 1 de diciembre de 2014 (fl. 58).
- Fallo de segunda instancia IVN Disciplinaria nro. 002-2013 del 13 de marzo de 2015¹⁹ proferido por la Brigada Móvil nro. 14 del 13 de marzo de 2015, a través de la cual se confirma en todas sus partes la providencia anterior. Providencia que fue notificada el 25 de mayo de 2015 (fl. 65).
- El 5 de junio de 2015 La Brigada Movil nro. 14 Batallón de Combate Terrestre nro. 92 profiere acto de revocatoria y resuelve²⁰ "(...) Revocar el fallo de segunda instancia de fecha 13 de marzo de 2015, proferido por el Comandante de la Brigada Móvil nro. 14 en su calidad de superior jerárquico con atribuciones disciplinarias, que dispuso confirmar en todas su partes la providencia de fecha 15 de octubre de 2014 proferida por el Mayor Arteaga Rodríguez Diego Orlando Comandante del Batallón de Combate Terrestre nro. 92, que sancionó al Soldado Profesional Retirado Salguero García Johnnatan Steven..." Providencia notificada el 24 de agosto de 2015 (fl. 77).

La apoderada judicial de la parte demandante, manifiesto que la Nación- Ministerio de Defensa - Ejército Nacional le ocasionó unos daños y perjuicios por la sanción impuesta al demandante mediante fallo disciplinario de primera y segunda instancia, consistente en suspensión e inhabilidad especial por el término de 60 días sin remuneración.

Lo anterior significa, que el actor al considerar que la decisión sancionatoria tomada en dicho acto administrativo le causó un perjuicio, acertó en demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que, esta decisión creó, modificó o extinguió una situación jurídica determinada.

En consecuencia, pese a que los actos fueron retirados del ordenamiento jurídico, el juez está en la obligación de efectuar el análisis de legalidad de los mismos en la medida que estos surtieron efectos jurídicos durante su vigencia.

Recuérdese que, conforme a lo señalado por el Consejo de Estado, la desaparición de un acto administrativo del ordenamiento jurídico no desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió de sustento para producir los efectos jurídicos generados mientras este haya tenido eficacia.

¹⁸ Ver folios 29 a 57

¹⁹ Ver folios 59 a 68

²⁰ Ver folios 69 a 75

RADICACIÓN : 2015-00487-01
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : JOHNNATAN STEVEN SALGUERO GARCÍA
Demandado : NACIÓN-MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL
Asunto : APELACION DE AUTO

8

Luego, le asiste razón a la parte demandante, cuando señala que es factible efectuar el análisis de legalidad de los actos demandados, aunque hayan perdido su fuerza ejecutoria para que, de tal modo, se pueda entrar a verificar la causación de los perjuicios cuyo resarcimiento reclama.

En consecuencia, no son de recibido los argumentos de la Juez, pues no resultaba procedente que la entidad emitiera otro acto pronunciándose respecto a los perjuicios reclamado cuando claramente como ya se indicó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la pertinente para demandar la reparación de los perjuicios que tuvieron por causa un acto administrativo que se considera ilegal; por ende tiene por objeto la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho que con el mismo se conculcó.

Por todo lo expuesto, se revocará la decisión de primera instancia, toda vez que la circunstancia de que los actos administrativos fuente del daño hayan sido revocados posteriormente, no muta la acción originalmente prevista por la ley para obtener la reparación de los perjuicios derivados del mismo.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCARA el auto interlocutorio 1481 dictado en audiencia inicial del 3 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, mediante el cual se declaró de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen, cáncelse su radicación y sin costas en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado Ponente

Elabo. Yurani López
Vo.Bo. Secretario

29 JUL 2020 17:20 TAV-1